

Vivianne Blanlot, Bernardo Larraín y Jorge Quiroz desmenuzan el funcionamiento del Estado chileno

"Es urgente modernizar": Las propuestas de tres analistas para evitar una crisis de gestión pública en la próxima década

NADIA CABELO

Un análisis crítico del escenario actual, la necesidad de cambios sustantivos y actuar con urgencia si se quiere evitar una crisis en la próxima década. En todo ello coinciden la exministra y directora de empresas Vivianne Blanlot, el economista y fundador de la consultora Quiroz&Asociados, Jorge Quiroz, y el presidente del centro de incidencia Pivotes, Bernardo Larraín.

Es que el diagnóstico no es bueno. A juicio de Blanlot, "las instituciones públicas no tienen dueño y, por tanto, la tendencia es que quienes trabajan ahí capturan las instituciones con el grave peligro de que lo hagan para su beneficio y no para el de quienes deben ser servidos por ellas". Añade un "estatuto administrativo que representa una rigidez tremenda" no solo para cambiar el personal, sino también los procesos. Por eso, cree, "si no se toma el tema en serio y se hace una reforma sustantiva, vamos a tener un gran escollo para el desarrollo".

—Larraín: Es urgente modernizar y tener un régimen de empleo público general que regule todo el ciclo de vida del trabajador: contratación, desarrollo, formación, capacitación y desvinculación (...). Lo segundo es que el Congreso y el Ejecutivo están permanentemente emitiendo nuevas regulaciones y falta una evaluación y eventual adecuación o discontinuidad de las normas. Y el tercer gran tema es la "permisología". Lo que tiene que interactuar una persona o una empresa para obtener permisos de distinta naturaleza es totalmente kafkiano.

—Quiroz: Para mí, el Estado está absolutamente capturado, en distintos niveles. Están todos los cargos que se han ido poniendo en las administraciones de distintos partidos políticos y que se van cuadrando porque son favores que se pagan. La planilla del sector público en materia de gastos en los últimos diez años ha aumentado 50% en términos reales. El PIB, en el mismo período, 18%. Y la inversión pública ha caído. (...) Lo anterior interactúa con leyes que también están capturadas por grupos. Y está la anomia. Por ejemplo, en Fonasa se gastan US\$ 800 millones más al año de lo que se debería gastar por licencias médicas. Ahí hay un triángulo: el funcionario al que le da un poco lo mismo, la ley que podría hacer más y la anomia que está operando.

—En algún momento ha sido prioridad mejorar la eficiencia del Estado?

—Blanlot: Yo estuve en varios gobiernos y todos tenían un programa de modernización. Frei Lagos, Bachelet I. Se trató de trabajar en algunos procesos específicos para mejorar la gestión y en generar instituciones nuevas, que se sustentan con un estatuto distinto (...). Porque sacar el estatuto administrativo es un problema político de envergadura. Cuando en el gobierno de Lagos se trató de tener un sistema de contratación diferente para los programas de concesiones, eso fue huelga en el MOP. Tendría que haber un programa de largo plazo e ir saliendo del estatuto administrativo gradualmente, en la medida en que se va renovando la dotación, con fórmulas atractivas. Tener mayor capacitación, empleos más desafiantes, una carrera funcional que tenga sentido, porque también la mayoría de la gente está impedida de ascender porque por arriba entran los compromisos políticos.

—¿Nadie está dispuesto a pagar los costos de reformar el estatuto administrativo?

—Larraín: Cuando tocas intereses de los incumbentes, por supuesto que es difícil. Ahora, yo creo que esa ha sido la excusa del mundo político (...). Se ha generado una cosa muy nociva, en todos los sectores, de que solo es posible avanzar marginalmente en aquellas cosas que están dentro de un supuesto régimen de lo políticamente viable. Y ese perímetro lo hemos estrechado de manera ridícula. Entonces se dice "no podemos cambiar el estatuto administrativo, no podemos cambiar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" (...). Chile no resiste otro ciclo electoral con ese tipo de discusión política, de no proponer las reformas relevantes.

—Quiroz: El perímetro de lo posible está definido por el tamaño del desastre. Y en diez años más vamos a enfrentarnos con una situación muy crítica. El déficit primario del sector público es más de dos puntos

Un nuevo régimen de empleo público que se implemente de forma gradual, pero pronta; eliminar regulaciones innecesarias y terminar con programas cuyo impacto es bajo o nulo son algunas de las medidas que creen necesarias antes de estar, en cinco o diez años más, "al borde del precipicio".



De izquierda a derecha: Jorge Quiroz, Vivianne Blanlot y Bernardo Larraín.

del PIB, el país crece a menos del 3 y la deuda que históricamente era 3 hoy es 5,7. Creo que ya hay cierta sensación de que este perímetro se puede ampliar. Ahora, yo le tengo pánico a la gran reforma. Soy partidario de cosas como, por ejemplo, en los permisos, mañana diría "no hay Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos de menos de US\$ 30 millones". Se me puede meter un bandido, va lo veremos, pero la primera vuelta es esta. Prefiero pisar la mesa.

—Larraín: Cuando planteamos desde Pivotes que para los proyectos de cierta complejidad y tamaño se abra una ventanilla de ingreso paralela mucho más temprana, donde se ingrese con una ingeniería básica de perfil que es suficiente para tomar ciertas resoluciones que disminuyen la incertidumbre posterior, es una intervención sustantiva, aunque no una refundación. Pero lo que estamos haciendo siempre son cosas no sustantivas y que pretenden ser integrales de todo.

—Blanlot: Necesitamos una reflexión sobre cuál es el Estado que queremos para este siglo y proponemos un programa de cómo llegamos ahí.

—En dos procesos constituyentes donde no hubo acuerdo en hacer dónde queremos ir. ¿Es posible tenerlo en esto?

—Blanlot: Un debate constitucional es por esencia un proceso altamente político y era imposible pensar que se iba a llegar a algo racional. Yo hablo de algo distinto (...). Necesitamos detenernos a pensar en nuestra arquitectura (...). Necesitamos tomar una serie de medidas bastante valientes y creo que en el próximo período de gobierno se tendrán que hacer estas cosas.

—Quiroz: Un país racional se da cuenta de que está a diez años y hace algo.

—Blanlot: Yo creo que estamos a cinco años.

—¿Como país estamos conscientes de esa urgencia?

—Blanlot: Hay una cantidad enorme de gente con experiencia en el sector público, en el privado y académico que están discutiendo esto y pensando qué se puede ha-

cer. ¿Qué hace falta? Me lo dijo alguien: concordar que vamos a llegar a acuerdos.

—Larraín: Para esos acuerdos está la política y es muy sano que las distintas posturas hagan sus planteamientos ambiciosos. Decir "este es mi proyecto país". Estoy consciente de que vamos a tener que colocar una primera etapa de reformas, pero tan importante como esta, será que los distintos actores políticos sean mucho más ambiciosos y que una tenga claras las diferencias entre el Frente Amplio y Chile Vamos. Lo que no es aceptable es que se omitan de la discusión del cambio del régimen de empleo público, por ejemplo.

—Quiroz: Yo soy un poco más escéptico de los acuerdos. Yo creo que hay diferencias bien profundas. Un acuerdo del 60% sería súper optimo, un acuerdo de 80% no va a pasar. Siempre sirve para llegar a acuerdo que se acaben las opciones. Cuando a Argentina se le acabó la plata, ya no es necesario discutir, porque no hay plata nomás, y tienes que recortar los gastos.

—¿Qué tan lejos estamos de tener que tomar decisiones como en Argentina?

—Larraín: Argentina tuvo que hacer los cambios que está experimentando porque llegó a un punto en que no tenía alternativa. Los países racionales anticipamos ese eventual destino y tomamos medidas distintas a las que se toman cuando estás al borde del precipicio. Yo creo que sí es necesario un concepto de desregulación. Hace mucho tiempo se plantea transformar la Comisión Nacional de Productividad en una institución más fuerte, con atribuciones para estar permanentemente revisando el stock regulatorio y recomendando que lo que no tuviera sentido se elimine. Como una instancia técnica no puede hacer recomendaciones vinculantes, que esta institución tenga tal estatuto, fortaleza y respeto que al parlamento o al Ejecutivo tenga que pensarse rojo si no sigue su recomendación.

—Quiroz: En un documental sobre Liz Truss, la primera ministra británica que duró 45 días, ella dice "subestimamos la necesidad de persuasión". Se me quedó grabado.

Chile no resiste otro ciclo electoral con ese tipo de discusión política, de no proponer las reformas relevantes".

BERNARDO LARRAÍN, PRESIDENTE DE PIVOTES

Hay una gran oportunidad de hacer cosas radicales, pero con apoyo ciudadano".

VIVIANNE BLANLOT, EXMINISTRA

El perímetro de lo posible está definido por el tamaño del desastre. Y en diez años más vamos a enfrentarnos a una situación muy crítica".

JORGE QUIROZ, ECONOMISTA Y SOCIO DE LA CONSULTORA QUIROZ&ASOCIADOS

En el Transantiago la evasión es cerca del 40%, pero hay un 60% que paga y una parte de ellos debe tener una rabia enorme con el que evade. Ahí tienes una base para persuadir, en cadena nacional. En las licencias médicas pasa algo parecido: la persona que está en el trabajo ve que alguien no viene nunca. En el sector público la remuneración bruta promedio son \$3 millones, \$2,2 millones líquidos más-menos. Cuando a la gente le explican que hay US\$ 2 mil millones en programas que no tienen ningún indicador para medir si cumplen su objetivo, y das tres o cuatro ejemplos, vas a persuadir.

—Larraín: Sobre todo cuando se inicia un período electoral es importante que todos contribuyamos a decirles a los candidatos que pongamos los temas de verdad en la discusión; no me venga con listas de supermercado eternas, sino cuáles son los tres o cuatro cosas sustantivas para reactivar la inversión, para mejorar el funcionamiento del Estado, etc. y exigirlo.

—Blanlot: Chile mostró, cuando se rechazó el primer proyecto constitucional, que la mayoría de los ciudadanos son sensatos. (...) Informar a la gente cómo están abusando de los servicios es súper importante. Hay una gran oportunidad de hacer cosas radicales, pero con apoyo ciudadano.

—¿Cuál sería el principal cambio que ustedes impulsarían?

—Larraín: Hay que empezar a

cambiar, con una reforma ambiciosa, el régimen de empleo público. No es posible que en Chile se designen 4 mil personas por confianza pública. No es posible que el 99% de las evaluaciones de desempeño sean perfectas (...). Segundo, una institución que evalúe el flujo regulatorio de las políticas públicas que entran al sistema. Y tercero, la "permisología", en particular la ambiental. Esto es que la gran meta de la reforma es bajar un 30%, o sea, pasamos de 13 años, de Domingo, a 30% menos. Lo que se necesita es que sean dos años de permisos y que el que obtengas sea sólido jurídicamente.

—Quiroz: Cualquiera gobierno nuevo después de seis meses pierde popularidad. Yo pongo el énfasis en los primeros seis meses. Ahí, para mí, hay tres vértices: la baja del impuesto corporativo, del 27 al 22 en el primer vuleto con una promesa hasta el 17. En paralelo, todo esto en una ley de emergencia, como la "ómnibus", pero no en esa magnitud: eliminar la DIA para proyectos de menos de US\$ 30 millones y los permisos los reducimos a la mitad. Y después viene la reducción. Arrancar con eso y ahí nos sentamos a ver otras medidas.

—Blanlot: Prioritaria la reforma al sistema político. Segundo, quisiera tener una idea de arquitectura básica de cuál es el Estado que queremos, incluyendo el régimen de los trabajadores. Definiría una porción de cargos de confianza política. También, la revisión de procesos en la gestión de los servicios públicos, a la luz de las posibilidades de integración de IA, partiendo por servicios que tienen problemas críticos de productividad, eficacia y eficiencia, e ir avanzando a una revisión sucesional. A pesar de que la tendencia en el ámbito económico es pensar en medidas directamente proinversión y crecimiento, esto debe ser acompañado por reformas que mejoren los servicios ofrecidos a las personas, partiendo por los servicios en situación crítica y con procesos de mayor urgencia. Tendría un *task force* que se dedique a la revisión de permisos no esenciales ni pertinentes por sector; a la revisión de programas de mala efectividad y su eliminación; y la identificación de los servicios y procesos.